



LA DEMOCRACIA EN EL QUIRÓFANO: ¿AUSTERIDAD O AMPUTACIÓN?

GABRIELA SALIDO

Bajo el seductor manto de la "austeridad republicana", la administración actual ha puesto sobre la mesa una nueva reforma electoral que promete, en palabras de la retórica oficial de 2026, hacer la democracia "sostenible".

Sin embargo, tras la fachada del ahorro presupuestal en el INE y los partidos, se asoma una reconfiguración del poder que parece diseñada más para consolidar la hegemonía de Morena que para fortalecer el derecho ciudadano al voto. El riesgo no es solo administrativo; es la posibilidad de una regresión institucional que desmantele los contrapesos que tanto costó construir.

El cambio en la integración del Congreso es, quizás, el punto más preocupante. Al modificar la representación proporcional, la propuesta de Morena corre el riesgo de silenciar a las minorías. En una democracia sana, el Poder Legislativo debe ser el espejo de la pluralidad nacional, no una caja de resonancia para el partido en el poder.

Al limitar estos espacios, se levanta un muro que dificulta que las voces disidentes influyan en la toma de decisiones, creando una sobrerrepresentación que no siempre coincide con la voluntad expresada en las urnas.

La insistencia en que ningún funcionario electoral gane más que la Presidenta y el recorte drástico a la estructura operativa de los organismos locales (OPLES) y tribunales no es solo una medida de ahorro; es una táctica de asfixia.

Un árbitro electoral debilitado presupuestalmente es un árbitro vulnerable a presiones políticas. La autonomía no es un lujo burocrático, es la garantía de que quien cuenta los votos no le deba el favor a quien los recibe. No se puede democratizar un país debilitando a las instituciones que deben garantizar la equidad en la contienda.

Morena argumenta que el pueblo quiere elecciones más baratas, y es una verdad a medias que esconde una intención política clara. El costo de una democracia no se mide solo en el presupuesto anual, sino en la libertad de elección y la certidumbre de los resultados.

México no necesita una reforma que "pavimente" el camino para el oficialismo; necesita una que garantice que el sistema electoral siga perteneciendo a los ciudadanos y no a la conveniencia del partido de turno.

La verdadera trampa de esta reforma radica en la narrativa de que el ahorro es un fin en sí mismo, cuando en realidad se utiliza como un mazo para golpear la operatividad del sistema. Al debilitar la infraestructura técnica que permite el conteo rápido, la fiscalización de campañas y la organización de casillas en las zonas más remotas, el gobierno no solo está ahorrando dinero, está sembrando la semilla de la incertidumbre.

Una elección "barata" que termina en conflicto pos-eleitoral por falta de certeza técnica resulta, a la larga, mucho más costosa para la estabilidad social y económica de la nación que cualquier presupuesto operativo del INE.

Si permitimos que las reglas del juego sean dictadas únicamente por quien lleva la ventaja en el marcador, la democracia dejará de ser el terreno común de todos los mexicanos para convertirse en la propiedad privada de un solo proyecto político.